

Estimado Secretario Kerry y Secretario Lew:

Escribimos para urgirlos a que actúen con prontitud para hacer frente a los increíbles niveles de violencia y a las graves violaciones de los derechos civiles en Honduras. El cruel asesinato de Berta Cáceres nos deja tristes y furiosos, y estamos horrorizados por la continua ayuda de nuestro gobierno a las fuerzas de seguridad de Honduras, tan ampliamente denunciadas por ser corruptas y peligrosas.

Para combatir las duras violaciones de los derechos humanos y la creciente cultura de impunidad en Honduras, solicitamos que el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro agoten todos los recursos posibles para lograr lo siguiente:

- Una fuerte presión ante el gobierno de Honduras para firmar un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de abrir una investigación internacional independiente sobre el asesinato de Berta Cáceres, conforme a la solicitud de su familia;
- Una enérgica presión ante la Fiscalía de Honduras para permitir el acceso limitado de la familia de Berta Cáceres a la investigación, incluyendo la oportunidad de proponer expertos independientes;
- Una fuerte presión ante el gobierno de Honduras para implementar y cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a la familia de Berta Cáceres, a miembros de COPINH, y a Gustavo Castro;
- Una fuerte presión ante el gobierno de Honduras para establecer y financiar de inmediato un sistema de protección para los activistas sociales, los defensores de derechos humanos y los miembros de la oposición política que permanecen en situación de riesgo por proveedores determinados por cada individuo. Este sistema podría utilizar como modelo los sistemas existentes en México y Colombia;
- Una revisión del aumento previsto en la financiación de las fuerzas de seguridad de Honduras. Creemos firmemente que el gobierno de EE.UU. debe cancelar inmediatamente toda ayuda a las fuerzas de seguridad de Honduras, incluyendo entrenamiento y dotación, dada la implicación de los militares y la policía de Honduras en ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, tortura y otras violaciones de los derechos humanos;
- La revisión del apoyo de Estados Unidos para préstamos a proyectos en Honduras de los bancos multilaterales de desarrollo financiados por Estados Unidos, como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con el fin de asegurar que asignaciones futuras no financien proyectos en Honduras que atenten contra los derechos de la tierra de los pueblos indígenas y campesinos; y
- Una fuerte presión sobre el gobierno de Honduras para detener inmediatamente y de forma permanente la Represa Agua Zarca, de acuerdo con la petición formulada por el Senador Leahy.

El asesinato de la Señora Cáceres, la co-fundadora y coordinadora del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) debería desencadenar una respuesta diplomática enérgica. La Señora Cáceres fue reconocida internacionalmente por su valiente trabajo en defensa de los derechos indígenas a la tierra y su oposición a los megaproyectos que atentan contra el medioambiente. En 2015 se le otorgó el prestigioso Premio Ambiental Goldman.

El asesinato de la Señora Cáceres encaja en un patrón amplio desde el año 2009 de ataques y asesinatos selectivos de activistas hondureños, así como de líderes comunitarios, en los cuales presuntamente participaron las fuerzas de seguridad del Estado. COPINH ha sido un blanco frecuente. En julio de

2013, las fuerzas armadas de Honduras dispararon y mataron a Tomás García, líder de COPINH de la comunidad lenca, mientras que se manifestaba pacíficamente contra la represa hidroeléctrica Agua Zarca. Según Amnistía Internacional, Cáceres y otros líderes del COPINH han sido objeto de persecución judicial y han tenido que enfrentar “cargos sin fundamento en relación con sus acciones como defensores de los derechos humanos”. En 2013, Cáceres fue detenida por falsos cargos que la acusaban de posesión de armas, y sólo fue liberada gracias a la presión de Amnistía Internacional y al rechazo internacional.

También queremos señalar que muchos otros activistas sociales de Honduras, los miembros de la oposición política y los defensores de derechos humanos han sido víctimas de asesinatos y ataques selectivos. De acuerdo con Global Witness, en 2015 Honduras era el país más peligroso del mundo para los activistas ambientales. Diferentes organismos internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Reporters without Borders, las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han documentado un fuerte aumento en los asesinatos selectivos de periodistas, profesionales del derecho, activistas LGBTI, activistas de derechos de tierras, sindicalistas, activistas afro-indígenas e indígenas, y otros activistas en los años transcurridos desde el golpe militar de 2009.

Haciendo caso omiso de la petición de su familia, el cuerpo de la Señora Cáceres fue sometido a una autopsia por parte de las autoridades hondureñas sin la presencia de un experto forense independiente. Tal acción subraya el peligro de permitir que el gobierno de Honduras —con su conocido historial de corrupción y subversión del estado de derecho, incluyendo la destrucción de pruebas— continúe con la investigación sin la supervisión internacional independiente.

Honduras y el mundo han perdido a una defensora extraordinaria por la justicia ambiental y social. Ahora tenemos que hacer todo lo posible para asegurar que su trágico asesinato sirva como catalizador para un cambio positivo en Honduras, que no simplemente sea un escándalo y más de lo mismo. Por lo tanto, los exhortamos a reconsiderar profundamente la estrecha relación y el apoyo de nuestro país al gobierno de Honduras.

Esperamos su respuesta a nuestras profundas preocupaciones sobre las terribles violaciones de derechos humanos en Honduras.

Atentamente,

Reps. Hank Johnson & Keith Ellison